

Gabriel Di Meglio y Sergio Serulnikov
La larga historia de los saqueos en la Argentina



En las últimas décadas, los saqueos se han convertido en episodios recurrentes de la sociedad argentina, que reaparecen cada fin de año en forma de amenaza, expectativa o posibilidad latente. Pocos hechos son más emblemáticos de las crisis terminales del país que los sucesos de 1989 y 2001, a tal punto que la imagen cristalizada de los saqueos, mezcla de desesperación y violencia, quedó asociada casi exclusivamente a estos dos momentos.

Sin embargo, como sostienen los autores de este libro, esa práctica reconoce una historia mucho más larga que merece ser contada, porque, en su excepcionalidad, en su capacidad para irrumpir en el espacio público y subvertir el orden, saca a la luz las tensiones irresueltas que atraviesan los períodos de normalidad.

Así, los saqueos tuvieron un rol protagónico durante las guerras de la Independencia y los conflictos armados del siglo XIX —como el pillaje a las tiendas de Buenos Aires que siguió a la batalla de Caseros, protagonizado no por el ejército vencedor, sino por las propias tropas porteñas derrotadas—. Resurgieron en la forma de violencia política vindicativa e iconoclasta con el ascenso y la caída de los dos grandes movimientos populares de comienzos y mediados del siglo XX, el irigoyenismo y el peronismo —las pertenencias del líder radical, desparramadas en la vereda de su casa desvalijada y saqueada, fue la foto de los vencedores—. Y volvieron a aflorar, esta vez como revueltas de subsistencia y asaltos masivos a comercios, a raíz del empobrecimiento de vastos sectores de la población desde finales de la década de 1980.

Por su destreza narrativa y rigor explicativo, *La larga historia de los saqueos en la Argentina* es una obra imprescindible para poner en perspectiva episodios que suelen quedar simplificados por las aproximaciones superficiales y la estigmatización. Al reconstruir los contextos, las dinámicas y los significados de este fenómeno colectivo, "leyendo" la especificidad de cada coyuntura (quiénes saquean, cuáles son las propiedades y propietarios afectados, cuándo y cómo se llevan a cabo los hechos), revela que, lejos de ser estallidos irracionales o espasmódicos, los saqueos representan el dramático emergente de profundos desacuerdos en torno a la soberanía territorial, la legitimidad del sistema político y la distribución de los recursos económicos.

Gabriel Di Meglio y Sergio Serulnikov
Autores

La larga historia de los saqueos en la Argentina

de la Independencia
hasta nuestros días



de genealogía con la violencia sufrida después de 1955, aquellos que ejercieron esos ataques se veían a sí mismos como los seguidores de una tradición con ecos transnacionales que eliminaba el "totalitarismo" del país. Sin embargo, algunos matices deben marcarse entre el momento yrigoyenista y el justicialista: en términos de la cultura política creada por los dos gobiernos. Así, una importante diferencia fue que hacia 1950 la cultura visual peronista (más amplia y profunda en su pretensión de expandirse a casi todos los ámbitos de la sociedad civil a través de la noción de la "comunidad organizada") generó mayores y más violentos conflictos con sus oponentes (incluida la Iglesia católica). En términos de despliegue de esa cultura política, las figuras de Eva y Juan Perón superaron a Yrigoyen en cantidad de imágenes, circulando a través de fotos, murales, revistas, diarios y pancartas en actos oficiales y ámbitos privados a lo largo de todo el país.⁷⁶ Además, por primera vez en la historia del siglo XX, ciudades y provincias fueron rebautizadas con los nombres del primer mandatario y su esposa.⁷⁷ Por último, el legado de esos símbolos tuvo una continuidad más duradera y arraigada en la cultura política argentina del siglo XX y XXI. En ese mismo repertorio de cultura política, el tipo de violencia vindicativa analizada en este capítulo —que tomó la forma de los saqueos tanto contra iglesias como a edificios peronistas— conformaron parte de las antinomias que marcaron al país a mediados del siglo XX.

6. Como si estuvieran comprando Los saqueos de 1989 y la irrupción de la nueva cuestión social

Sergio Serulnik

A fines de febrero de 1989, una masiva ola de saqueos sacudió la ciudad de Caracas. En respuesta a una duplicación del precio del petróleo y los transportes establecida por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en virtud de un amplio programa de ajuste estructural, los pobladores de los barrios pobres cortaron rutas, armaron barricadas, quemaron vehículos y, sobre todo, atacaron innumerables comercios, desde pequeños negocios hasta los más importantes centros comerciales de la capital venezolana. Los saqueos se esparcieron pronto a todo el país y las fuerzas de seguridad se vieron completamente desbordadas. Sólo pudieron contener la violencia colectiva tras cinco días de sangrientos enfrentamientos que dejaron como saldo cerca de cuatrocientos muertos.¹ El "Caracazo", como se conoció la revuelta, fue seguido con mucha atención en todo el continente. No fue percibido como un hecho aislado, sino como el fruto de tensiones económicas estructurales que, de una manera u otra, alcanzaban a todos. Coronaba un prolongado ciclo de estancamiento productivo, desequilibrios externos, creciente desempleo, sucesivos recortes del gasto público y otras medidas de austeridad que, en conjunto, llevaron a un severo deterioro de las condiciones de vida de vastos sectores sociales. Se trataba de un fenómeno de alcance regional asociado a la crisis de la deuda externa que se desencadenó a partir de la cesación de pagos declarada por México en 1982. Ya por entonces en América Latina los años ochenta eran tildados como "la década perdida".

La clase dirigente argentina miró con particular nerviosismo lo ocurrido en Venezuela. Para el momento del Caracazo, tras largos años de recesión económica, el país entraba en una espiral de descontrol que desembocaría pronto en una inusitada escalada hiperinflacionaria. Entre febrero y marzo de 1989, tras el rotundo fracaso del último paquete de medidas lanzado por el presidente Raúl Alfonsín, el denominado "Plan Primavera", los funcionarios del gobierno comenzaron a admitir sin reservas su impotencia para frenar el alza de los precios, la devaluación de la moneda, la fuga de capitales y el colapso fiscal. La situación social

se agravaba con el paso de las semanas. Que ocurriera algún estallido violento de protesta no escapaba a los cálculos de nadie. Sin embargo, vista en perspectiva histórica, la reacción ante los saqueos venezolanos, en tanto modalidad específica de acción colectiva, resulta muy peculiar. Cuando se consultó al candidato presidencial del peronismo Carlos Menem acerca de si pensaba que algo así podría ocurrir en el país, respondió que lo veía poco factible. "Argentina no es Venezuela -declaró-, si hay un movimiento obrero disciplinado que acata a sus dirigentes, ese es el nuestro".² En la misma línea se pronunció el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Saúl Ubaldini. Aunque creía, como todos, que las penurias que atravesaban los asalariados y sectores de bajos ingresos eran alarmantes, la palabra "hambre", consustancial con los saqueos de alimentos, todavía no formaba parte de su léxico. Y al igual que Menem, consideraba que, llegado el caso, las poderosas organizaciones que los representaban serían capaces de canalizar una eventual explosión de descontento. Por lo demás, habría elecciones presidenciales en pocos meses y con la victoria del peronismo, un hecho ya casi consumado, la masa trabajadora volvería a tener a uno de los suyos en la Casa Rosada.

El partido peronista, ya en plena campaña electoral, tenía escasos motivos para minimizar la gravedad de la situación y, menos aún, para mostrarse indulgente con las políticas económicas del oficialismo. Tampoco los tenía el secretario general de la central obrera que, desde la asunción de Alfonsín en 1983, se había erigido en la principal fuerza de oposición al gobierno, declarando trece paros generales y bloqueando en el Congreso una de las más preciadas iniciativas del Ejecutivo, la ley de reforma sindical. De modo que la confianza en la inmunidad de la sociedad argentina al tipo de erupciones de desesperación observadas en Caracas no representaba un mero cálculo político: reflejaba una visión muy extendida de las clases dirigentes y, por cierto, también el sentido común de vastos sectores sociales. Era la noción según la cual, para citar una influyente columna política de la época, "los argentinos comían, por más pobres que fueran".³ Los sociólogos Victor Armony y Gabriel Kessler han mostrado que, a pesar de las cifras de pobreza que venía arrojando el Indec y las muchas evidencias cualitativas, en la década del ochenta:

El hambre aparece como transitorio y hasta una anomalía con algún componente individual para muchos, sin lograr todavía percutir en las imágenes que el país tiene sobre sí

mismo... el mito del país sin pobres, provisto de recursos donde las oportunidades para acceder a ellos son casi ilimitadas, se mantiene.⁴

Como todo mito social arraigado, tenía sus fundamentos. En comparación con otros países de la región, la Argentina había logrado durante el siglo XX significativos niveles de integración social, empleo, protección laboral y distribución progresiva de los ingresos. Era el producto de las políticas del primer peronismo, con su comprensiva legislación social, estado de bienestar e influyentes -si bien muchas de ellas corruptas y acomodaticias- organizaciones gremiales, y del impacto combinado del desarrollo industrial, la masiva inmigración europea, la formidable capacidad de producción alimentaria, una densa red de sectores medios y un extensivo sistema educativo público y gratuito que llegó a generar tasas de alfabetismo comparables a las europeas o norteamericanas. Si la Argentina quedaba en Latinoamérica, en el fondo no era del todo latinoamericana. Para muchos, no lo era en absoluto.

Lo que los dirigentes políticos y gran parte de la opinión pública no pudieron prever fue que en cuestión de semanas esos presupuestos se harían trizas. En mayo de 1989, el Conurbano de Buenos Aires y otras grandes ciudades del Interior protagonizaron escenas que mucho se asemejaban a lo visto en las barriadas pobres de Caracas. Miles de personas, a cara descubierta y plena luz del día, derribaron las puertas de grandes y pequeños comercios para llevarse todos los alimentos y otros bienes que pudieran cargar. Fue la primera ola de saqueos por motivos económicos en la Argentina moderna. Como luego vendrían otros, no es difícil subestimar el profundo impacto social que tuvieron en su época. Es cierto que sus atributos generales parecieron bastante evidentes desde un comienzo: se trataba de un episodio asociado a un inusitado fenómeno económico (la hiperinflación), un actor social definido (los sectores urbanos empobrecidos) y un contexto político signado por la ineptitud del Estado para impedir la desintegración del valor de la moneda, primero, y asegurar el orden en las calles, después. Su significado de largo plazo, no obstante, resulta mucho más opaco.

Podría afirmarse que el principal efecto de los sucesos de 1989, por el momento histórico en el que ocurrieron y por ser los primeros en su clase, fue cambiar la percepción de las personas respecto del mundo que habitaban. Tuvieron en este sentido una dimensión que el sociólogo italiano Alberto Melucci, en relación con otros movimientos sociales de la época, llamó "profética":

Su función es revelar lo que está en juego, anunciar a la sociedad que existe un problema fundamental en una determinada área. Asumen una creciente función simbólica: podría probablemente hablarse de una función profética. Son una suerte de nuevo medio de comunicación⁵

En virtud de su masividad y escala geográfica, el problema central que los saqueos anunciaron era que la exclusión social no podía ya ser vista como un asunto contingente y circunscripto a un sector minoritario de la población —los llamados “pobres estructurales”, que habitaban las villas miserias y otros asentamientos precarios de las grandes ciudades— o a tradicionales focos de pobreza endémica, como las provincias del noroeste.⁶ Tampoco que se tratara del producto friccional propio de un determinado estadio de desarrollo, una suerte de afección del progreso, o de un reservorio de trabajo funcional al sistema productivo, un ejército industrial de reserva. Tras casi tres lustros de retroceso industrial y precarización del empleo, semejantes racionalizaciones resultaban ya inviables. La pobreza a gran escala, sin una demarcación espacial precisa y sin horizontes de superación, había llegado para quedarse.

En los años por venir, muchos científicos sociales en la Argentina, siguiendo al sociólogo francés Robert Castel, conceptualizarían el fenómeno como “el fin de la sociedad salarial”.⁷ Tulio Halperin Donghi, en referencia a problemáticas específicas de nuestra historia, apeló a una imagen no menos sugerente: “la larga agonía de la Argentina peronista”.⁸ Lo que los motines de subsistencia hicieron fue marcar un cambio de época en la discusión pública sobre la cuestión social. Esta dejó de gravitar primordialmente en torno al mundo de los trabajadores y sus derechos, para comenzar a centrarse en los pobres y sus necesidades.⁹ Y, junto con la pobreza, una novedosa modalidad colectiva de intervención en los asuntos públicos haría su tumultuosa irrupción. Las imágenes que los medios gráficos y audiovisuales amplificaron con repetitiva crudeza portaban un mensaje: la política de los pobres, con su pesada carga de ambivalencia, inmediatez, imprevisibilidad y aparente desorden, ya no podría soslayarse. Cuando Carlos Menem o Saúl Ubaldini hablaban del “pueblo trabajador” creían hablar por el todo; los multitudinarios saqueos revelaron que lo hacían por una de las partes. Ya nadie podría hablar así desde entonces, empezando por los propios actores de los hechos que, como nunca antes, vieron su imagen multiplicada en cientos de asaltos colectivos en tantos otros barrios humildes de las principales ciudades

del país. La pobreza estaba en todos lados. Había llegado la hora de tomar nota de sus consecuencias.

De las consecuencias de la política de los pobres, tal y como se puso de manifiesto en mayo y junio de 1989, se ocupa este capítulo. Tras repasar las condiciones económicas detrás de los saqueos, se exploran sus objetivos, organización y blancos de ataque. Procuramos asimismo discernir los valores que permearon las acciones a partir de los patrones de conducta y los discursos de sus partícipes. Finalmente, situaremos el fenómeno en el marco de otras formas actuales de protesta y movilización social en la historia argentina reciente. A más de veinticinco años del hecho, tras varios estallidos semejantes, resulta imperioso ir más allá de un análisis meramente taxonómico. Es preciso historizar la práctica colectiva en sus distintas manifestaciones y emplazarla dentro de un arco temporal amplio. Recuperar la especificidad histórica de los primeros asaltos masivos a comercios en la Argentina reciente es nuestro objetivo primordial.

Dado que las principales fuentes son periódicos y revistas, la información es limitada. Muchos aspectos de la coordinación o las redes interpersonales detrás de las acciones escapan al interés o a las posibilidades de investigación de los reporteros. Sin duda, la narración de los hechos está en gran parte informada por la opinión o los prejuicios de sus autores. Sin embargo, a mi juicio sería erróneo desestimar estas fuentes por creer que la historia oral o, en su momento, el trabajo de campo fueran a revelar alguna trama clandestina detrás del estallido por parte de activistas políticos, líderes barriales, redes delictivas o, por acción u omisión, de las propias fuerzas de seguridad. Una explosión social de tamaño dimensión espacial y simultaneidad, carente de precedentes, deja poco lugar para teorías conspirativas de cualquier tipo. De hecho, una de las preocupaciones centrales de los periodistas y, como veremos, también de las autoridades gubernamentales fue la presencia de agitadores o promotores directos o indirectos de la violencia, definidos como personas u organizaciones que desde las sombras incitaron a los saqueos por motivos distintos a los de sus partícipes. Poco encontraron más allá de las inevitables situaciones particulares propias de cada localidad. Las prevenciones metodológicas básicas que hemos adoptado consisten en descartar las caracterizaciones o descripciones generales de los eventos insertos en las notas periodísticas, las columnas de opinión, los editoriales o las declaraciones de funcionarios o dirigentes políticos y sociales. El examen de los objetivos y las motivaciones de los actores está basado en sus prácticas y testimonios. La existencia de múltiples reportes, con sesgos ideológicos

muy diferentes entre sí, ofrece cierto control sobre la autenticidad y representatividad de las fuentes.¹⁰

Huelga decir que el estudio es parcial y tentativo. Sin embargo, hasta tanto aparezcan trabajos que permitan enriquecer y complejizar el cuadro de situación, la información empírica disponible ofrece material suficiente para especular sobre la dinámica y el significado de la inicial oleada de saqueos y de la consiguiente irrupción de la nueva cuestión social en la escena pública argentina.

EL CONTEXTO

Entre el 24 de mayo y el 1 de junio de 1989, las más importantes ciudades argentinas registraron alrededor de 282 episodios de violencia asociados a saqueos de comercios. Los principales focos fueron los conglomerados urbanos del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba y, en menor medida, Mendoza, Tucumán, la Capital Federal y algunas otras capitales de provincia.¹¹ En el curso de nueve días de continuos disturbios, cientos de negocios fueron atacados y en ciertos barrios prácticamente todos los supermercados y almacenes sufrieron robos. Al principio las acciones fueron protagonizadas por pequeños grupos compuestos sobre todo por mujeres. Entraban de manera pacífica a los establecimientos, llenaban sus bolsas con leche, azúcar, arroz, harina y otros alimentos, y se retiraban sin abonar. Afuera los esperaban familiares o conocidos que los ayudaban a llevar a sus casas la mercadería apropiada. En ningún momento intentaban tomar el dinero de las cajas registradoras o bienes que no fueran de primera necesidad.¹²

Esta modalidad de acción no tardaría en ser reemplazada por ataques violentos por parte de grupos de treinta a cuarenta personas. Algunos destruían las cortinas metálicas o rejas de entrada, y luego el resto ingresaba a los locales. Acaso por el efecto de demostración de días de saqueos generalizados o por la imposibilidad de continuar haciéndolo en pequeña escala por las medidas de seguridad implementadas por la policía y los dueños de los negocios, los eventos se tornarían masivos. Multitudes se unieron a los disturbios. Las calles de San Miguel, San Justo y Moreno, Villa Gobernador Gálvez, el barrio sur de Rosario, o Villa Páez en Córdoba se convirtieron en el escenario de virulentas batallas. Millares de personas asaltaron casi todos los negocios de esas localidades enfrentándose a sus dueños y a la policía. Para entonces no sólo se tomaban alimentos

y productos de primera necesidad, sino también dinero, electrodomésticos y otro tipo de mercancías. Algunos propietarios comenzaron a electrificar las puertas de sus locales y a intentar defenderse con armas de fuego. Otros procuraron calmar a la multitud mediante la distribución gratuita de comida. Hubo repetidos rumores de que hordas de gente se desplazarían al centro de las ciudades para arrasar allí con los negocios.

Los participantes en saqueos, alrededor de 40 000 según una estimación gruesa disponible, representaron sin duda una pequeña fracción de la población bajo la línea de pobreza.¹³ Pero la magnitud del acontecimiento no puede ser establecida por ese crudo cálculo estadístico. Al tratarse de medidas extremas de acción directa antes que de las convencionales expresiones políticas o sociales de protesta, al carecer de antecedentes y afectar cientos de barriadas de muchas de las más populosas urbes del país, los asaltos colectivos tuvieron un extraordinario efecto multiplicador. Las escuelas suspendieron las clases, los colectivos dejaron de circular al atardecer e innumerables comercios cerraron sus puertas por precaución, lo que generó desabastecimiento. Durante días el país pareció detenerse. La gravedad de la situación llevó a que se declarase el estado de sitio en todo el territorio nacional y el estado de emergencia en algunas provincias. Unas quince personas perdieron la vida, y hubo cientos de heridos y arrestados.

Aunque el estallido social fue disparado por un inusitado pico hiperinflacionario, derivó en mutaciones de largo plazo en la estructura social. La degradación de las condiciones de vida de los sectores de bajos ingresos no era, como muchos creían en la época, un fenómeno coyuntural, sino una tendencia que llevaba años de maduración y sólo se agravaría con el tiempo. Dado que hay una copiosa literatura sobre la llamada "nueva pobreza", bastará resumir aquí algunos datos básicos que sirvan de contexto a nuestro análisis.¹⁴ Desde mediados de los años setenta, en particular a partir de la dictadura militar de 1976, la Argentina experimentó un proceso de concentración económica, caída de la actividad industrial, contracción del Estado y aumento de la precarización laboral. El impacto de esta tendencia en los sectores de bajos ingresos fue profunda y, en muchos aspectos, irreversible. Se calcula que entre 1975 y fines de los años ochenta los asalariados perdieron por sobre un 40% del valor de sus ingresos. Para 1989, según señala Alberto Minujin, la participación del salario en el producto había alcanzado los niveles más bajos desde mediados de siglo.¹⁵ La pobreza se incrementó de manera sustantiva. Ya el censo de 1980 había arrojado que el número de hogares pobres era el 22,3% de la población, alrededor de siete millones de personas.¹⁶ Para

el período previo a los saqueos, la evolución de la pobreza se advierte con particular claridad si tomamos como muestra el Gran Buenos Aires, la zona que concentra alrededor de un cuarto de la población total del país, la de mayor actividad industrial y para la cual se cuenta con estadísticas confiables. Por otra parte, como han apuntado Oscar Altimir y Luis Beccaria, no hay motivos para creer que las tendencias aquí fueran marcadamente diferentes a las del resto de los conglomerados urbanos.¹⁷ Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el Indec comenzó a realizar para esta época, el porcentaje de hogares pobres en el Conurbano bonaerense se elevó durante los años ochenta en un 67,4%. Representaban el 20,6% en 1980, el 33% en 1988 y el 34,5% en 1990, un registro que incorpora ya los efectos de la escalada hiperinflacionaria y la crisis económica general de 1989.¹⁸ En 1988, un 8,8% de la población estaba bajo la línea de indigencia, vale decir, hogares con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentos.¹⁹

Un dato crítico es que el grupo de mayor crecimiento dentro de los sectores de bajos ingresos fue el de los nuevos pobres, familias pauperizadas que hasta entonces podían satisfacer sus necesidades esenciales o incluso formaban parte de la clase media. Este grupo pasó de representar el 4,2% del total de la población del Gran Buenos Aires en 1980 a 16,8% en 1988 y 18,4% en 1990.²⁰ ¿Cómo son definidos estos sectores? Son hogares cuyos ingresos cayeron a niveles que resultan insuficientes para cubrir una canasta de bienes y servicios capaz de atender las necesidades básicas de alimentación, indumentaria, transporte, medicamentos y otros. Las familias empobrecidas tienden a compartir el perfil sociocultural con los no pobres (educación media y superior; estabilidad familiar o número de hijos), pero comparten con los pobres estructurales, además de ingresos insuficientes, la precariedad laboral, la falta de cobertura adecuada de salud y en general el acceso a la red de protección social, que desde mediados de siglo se construyó en torno al empleo estable. No se trata necesariamente de desempleo masivo, el cual haría su dramática entrada en escena en la década del noventa, sino de situaciones asociadas a contracciones salariales, inestabilidad laboral, subempleo, informalidad y precarización de las condiciones de trabajo. Se calcula, por ejemplo, que alrededor de la mitad del universo de los hogares pobres estaba compuesto por trabajadores manuales asalariados.²¹ De modo que la mayoría de las personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza podrían ser definidas como trabajadores pauperizados. Estaban integrados tanto al sector privado, en particular la pequeña y mediana industria que sufrió con mayor crudeza los embates de la recesión, como a un

sector estatal en pronunciada debacle (empleados de la administración pública nacional y provincial, maestros, ferroviarios y trabajadores de distintas empresas estatales).

Al cerrarse la década, los hogares pauperizados superaban ya los de los pobres estructurales, que representaban un 16,1% del total. A diferencia de los primeros, los pobres estructurales se definen en función de carencias relativas a vivienda, agua potable, instalaciones sanitarias, electricidad, infraestructura urbana mínima, educación adecuada y otros servicios agrupados en la categoría estadística "necesidades básicas insatisfechas". Se trata de indicadores menos sensibles que el nivel de ingreso a variaciones de corto y mediano plazo.²² La propia profundidad de la crisis, al propiciar una caída de las migraciones del Interior o de países limítrofes a los centros urbanos, hizo que el número de pobres estructurales no sólo creciera menos que el de los sectores empobrecidos, sino que se mantuviera relativamente estable. El dato saliente aquí no es el crecimiento cuantitativo, sino el marcado deterioro en las condiciones de vida. Si en 1980 se consideraba "pobres estructurales" a habitantes de villas o asentamientos precarios que presentaban aquellas situaciones de privación en la cobertura de servicios básicos, pero podían ganar lo suficiente para atender requerimientos de comida e indumentaria, diez años después el 63% presentaba ingresos per cápita por debajo de la línea de pobreza.²³ Así, pues, para la época en que estalla la primera ola de saqueos de alimentos, había en el país muchos nuevos pobres, y los viejos pobres eran más pobres aún.

Una consecuencia directa de la nueva cuestión social fue la reconfiguración del espacio urbano. En los antiguos cordones industriales del Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Mendoza, la pauperización provocó que los contornos territoriales de la marginación laboral se difuminen y que "la frontera entre las clases populares empobrecidas y los pobres [tendiesen] a desaparecer".²⁴ Los índices de mortalidad infantil, delincuencia, riesgo sanitario o desocupación entre ambas poblaciones comienzan a representar sólo diferencias de grado. La barrios humildes se tornan, por lo demás, zonas de "inmovilización de la pobreza", en un doble sentido espacial y temporal: lo primero, porque cada vez más la vida de sus habitantes tiende a quedar confinada al ámbito local debido a la falta de oportunidades laborales; lo segundo, porque las posibilidades de ascenso social que existían durante la época de auge del crecimiento industrial se constriñen de forma drástica.²⁵

El descontrolado aumento de precios operó sobre esta situación de base. Por supuesto, las elevadas tasas de inflación no eran en sí mismas

nada nuevo y ya desde la década del setenta venían coadyuvando a la sostenida caída de los ingresos de los sectores medios y bajos. Entre 1975 y 1990 la inflación media anual del país fue del 300%, sin descender nunca por debajo del 100%.²⁶ Pocos países en el mundo exhibían semejantes registros. A mediados de la década, había habido ya un conato de hiperinflación, con aumentos generales de precios del 1010% entre mediados de 1984 y 1985. En esa ocasión, pudo ser contenida gracias a la implementación de un ambicioso plan heterodoxo de estabilización que determinó un congelamiento simultáneo de todos los precios de la economía, la desindexación de los contratos y la instauración de una nueva moneda nacional, el austral. Para 1987, sin embargo, la situación volvió a deteriorarse con el retorno a tasas mensuales de inflación por encima del 10%. En 1989, la alta inflación desembocó por fin en hiperinflación.

En los primeros meses del año, como resultado de la crisis del sector externo, masivas corridas al dólar y falta general de confianza, se produjo una dévaluación de la moneda superior al 100%. La inflación alcanzó para mayo y junio tasas mensuales de 78,5% y 110%. Los precios eran remarcados en los comercios varias veces al día, lo que diluía todo valor de referencia. Según la revista *Time* de junio, mientras los salarios durante los primeros cinco meses se habían incrementado en alrededor de un 200%, el precio del pan lo había hecho en 554%, el de la leche en 441% y el del queso en 1000%. Como es natural, la hiperinflación contrajo de forma dramática la capacidad de subsistencia de cerca del tercio de la población que se encontraba en situación de pobreza o indigencia. Pero las condiciones de extrema vulnerabilidad abarcaban en verdad una proporción mucho más alta si consideramos que un 17,5% de la población ocupada que estaba por encima de la línea de pobreza pertenecía a hogares con ingresos per cápita de apenas entre 1 y 1,5 de esa escala.²⁷ Cualquier aumento drástico de precios los ponía de inmediato, antes que las estadísticas llegaran a capturarlos, en posición de no poder afrontar sus necesidades elementales. También contribuyó a agravar la situación el hecho de que el vaciamiento de las arcas del Estado causara una paralización del Plan Alimentario Nacional (PAN), el programa asistencial que el gobierno radical había puesto en marcha desde su asunción en 1983 para proveer alimentos a los hogares más humildes.²⁸

La hiperinflación, como ningún otro fenómeno de mercado, pone en cuestión la función de las instituciones estatales como reaseguro último de las reglas mínimas de convivencia. Como han sostenido Silvia Sigal y Gabriel Kessler, la hiperinflación representa una experiencia única que

afecta el fundamento mismo de las interacciones sociales. Disminuye la previsibilidad de las relaciones entre los agentes económicos y bienes, la incoherencia de los sistemas de equivalencia entre los bienes se generaliza y la autoridad pública se desvanece.²⁹

También se contraen dramáticamente los marcos temporales de referencia de los comportamientos económicos. La vertiginosa pérdida de valor del dinero llevó a que sectores de ingresos medios y altos adoptaran estrategias tales como la indexación de los contratos, la inmediata dolarización de los ahorros, la compra anticipada de bienes de consumo o la conversión del salario mensual en plazos fijos semanales a tasas de interés que, al menos de manera parcial, paliaban la espiral inflacionaria. Los sectores bajos poco y nada podían hacer para evitar la incesante licuación de sus magros ingresos. Los últimos días del mes se tornaron un momento crítico.

Fue en este escenario que se llegó a los comicios del 14 de mayo. El candidato del peronismo, Carlos Menem, como todos vaticinaban, ganó las elecciones, aunque lo hizo con márgenes aún mayores a los anticipados por las encuestas de opinión. Fiel a sus raíces políticas, Menem había prometido durante la campaña electoral una "revolución productiva" y un "salaríazo". A nadie sorprendió, pues, que en los días posteriores los mercados reaccionaran con nuevas alzas en el valor del dólar y aumentos generalizados de precios.³⁰ Mucho menos previsible fue que apenas diez días después de las elecciones presidenciales, los habitantes de las barriadas pobres de las grandes ciudades del país, que habían votado de forma abrumadora a favor del candidato peronista, protagonizaran una ola masiva de saqueos.

LOS SAQUEOS

Los disturbios por alimentos conformaron una poderosa expresión de protesta, posiblemente la más impactante y perturbadora desde la recuperación de la democracia en 1983. Lo fueron en gran parte porque, como recuerda un reciente estudio sobre la economía política de los *food riots*, al ser la alimentación el más elemental símbolo del contrato social, el motín de subsistencia marca el momento en que las iniquidades materiales y simbólicas alcanzan su punto más álgido.³¹ Los efectos de la mo-

vilización se dejaron sentir de inmediato: en los días posteriores se precipitaron medidas tales como la extendida implementación de amplios programas asistencialistas, el congelamiento de precios de los productos de primera necesidad y la anticipación de la fecha de asunción del presidente electo Carlos Menem. Aun así, para los pobladores de los barrios pobres, la elección del saqueo como comportamiento grupal pudo representar simplemente una respuesta desesperada, y por tanto legítima, a una situación de extrema necesidad. A diferencia de las huelgas, las manifestaciones callejeras, los cortes de rutas o los ataques a edificios públicos, el contenido beligerante y contestatario de los asaltos a comercios emanó de la sumatoria de los incidentes más que de la estructura de cada uno de ellos en particular o, menos aún, de su coordinación. Fue más una protesta generalizada que un movimiento general de protesta. De allí que la organización y los móviles de la práctica —los factores sobre los se tiende a focalizar las teorías de la acción colectiva— digan mucho sobre la condición social de sus actores, la anatomía del movimiento, pero poco sobre su fisiología: las derivaciones políticas de las acciones al ponerse en relación entre sí y con la sociedad en su conjunto. Es imprescindible analizar ambas dimensiones, como lo es también no confundir una con otra. Los limitados objetivos y recursos organizativos de los participantes no se condijeron con las repercusiones de corto y largo plazo que adquirieron sus iniciativas.

Hasta donde sabemos, en efecto, los saqueos no parecieron ser coordinados ni incitados por asociaciones de base o partido político alguno. Ello contrasta, en parte, con la segunda oleada de asaltos colectivos a comercios doce años más tarde, cuando los nuevos movimientos sociales de desocupados, dirigentes e instituciones barriales o punteros del peronismo procuraron en muchos casos canalizar, si no fogonear, los reclamos populares.³² En este sentido, si bien las revueltas de subsistencia de 1989 y 2001 pueden ser interpretadas como expresiones en espejo de las crisis terminales de la Argentina reciente, fueron acontecimientos de distinta índole. La primera surgió en esencia como una revuelta de consumidores: sectores de bajos ingresos imposibilitados de acceder a bienes de primera necesidad por el brote hiperinflacionario y la prolongada crisis económica precedente. Fue la propia magnitud de los disturbios callejeros lo que tornó evidente que la hiperinflación era un desencadenante y el saqueo, un síntoma. Por detrás de ambos hechos, espectaculares pero efímeros, lo que salió a la superficie fue la exclusión social a gran escala: hogares cuyos salarios no garantizaban su supervivencia y requerían de la instauración de mecanismos extramer-

cantiles para hacerlo. Se trató pues de una práctica a caballo entre dos lógicas, a la vez materiales y simbólicas. Saqueaban como si estuvieran de compras —tal era la actitud de muchos de sus participantes—, cuando el nexo salarial con el mercado no los habilitaba ya, ni lo haría en el futuro, a atender sus demandas por ese medio. En la década venidera, la profundización del desempleo y del subempleo estructural llevó a que, cuando se volvieran a producir saqueos, fuera insostenible verlos como una revuelta de consumidores pauperizados, sino de desahuciados receptores del asistencialismo estatal y paraestatal. No era ya posible considerarlos trabajadores empobrecidos, sino habitantes permanentes de la pobreza, autoidentificados como tales y representados en diversos colectivos de desocupados de base territorial. Muy distintas eran las realidades de la revuelta de subsistencia de 1989, un movimiento sin linaje conocido ni esquemas preconcebidos de significación.

Aunque no pueda decirse que los saqueos fueran espontáneos —ningún evento de tamaño dimensión lo es— la similitud de las acciones en muy distintas localidades del país y la propia mecánica de los hechos sugieren que las acciones tuvieron un mínimo de articulación. La organización y el liderazgo parecieron más bien laxos, compuestos de redes informales basadas en vínculos interpersonales y de vecindad. La gente actuó en grupo, no de forma individual, pero hay muy escasos indicios de que entidades sociales o partidarias hubieran dado forma a sus iniciativas.³³ Es posible, en cambio, que los asaltos a comercios hubieran surgido, y fueran la extensión en otra escala, de estrategias familiares de subsistencia que habían empezado ya a generalizarse. Se dijo que en las semanas previas al estallido se multiplicaron los pequeños hurtos de alimentos por parte mayormente de mujeres que se veían empujadas por la necesidad. Así pues, en el Hogar Obrero del barrio Alberdi, en la provincia de Córdoba, uno de los primeros supermercados en sufrir saqueos, los empleados explicaron que no pensaron, en principio, en denunciar el incidente, porque actos de esta naturaleza, aunque de menor magnitud, eran para entonces más o menos habituales. El encargado sostuvo que “se trata de un hecho que suele ocurrir en los supermercados protagonizado por lo que llamamos ‘mecheras’ (mujeres que sustraen mercadería ocultándolas entre las ropas)”.³⁴ En ocasiones, ni siquiera se procuraba disimularlo: se lo hacía a vista de todos. En las radios de Rosario se empezó a reportar que madres o padres ingresaban con sus hijos a los supermercados, consumían productos lácteos al pie de las góndolas y dejaban los envases vacíos en el lugar. En tanto se hacía en ostensible desafío al personal de seguridad, no podía siquiera

decirse que fueran robos en sentido estricto. Es fácil imaginar la estupefacción de los comerciantes frente a semejante cuadro. Ante la crisis de subsistencia provocada por la disolución del valor de la moneda, muchos parecieron optar por hacer la vista gorda, tal vez sensibilizados por la escena o, más pragmáticamente, "como forma de intentar evitar lo que sería realidad algunos días después".³⁵

Lo sucedido días después distaría mucho en su forma, pero no tanto en su contenido. Las acciones se volvieron multitudinarias a partir del 24 de mayo, momento del mes en que el efecto de la escalada diaria de precios sobre los ingresos empezaba a hacerse sentir con particular intensidad. Para entonces, grupos de entre cientos o incluso miles de personas comenzaron a congregarse en la entrada de los establecimientos. Llegado un punto, algunos comenzaban a forzar las puertas de los comercios o lanzaban piedras contra el personal de seguridad o la policía, en caso de que estuviera en el lugar. No importaba quiénes tomaban la iniciativa. Una vez que se daba el primer paso, los otros se sumaban. Hubo casos en que se probaron otros métodos. El dueño de un autoservicio en el norte de Rosario relató que algunas personas pidieron charlar con él para acordar una distribución pacífica de alimentos. "Mire, jefe -le dijeron-, aquí hay muchos chicos que tienen hambre así que venimos a pedirle algo de comida". Viendo la multitud que aguardaba en la calle, no le quedó mucha alternativa. Sin embargo, debido a la escasa coordinación de la acción, bastó que algunas personas comenzaran a apedrear el local para que el resto ingresara a saquearlo.³⁶ En otras ocasiones, las conversaciones dieron frutos, y se distribuyeron alimentos de forma ordenada. Pero tales negociaciones dependieron siempre de circunstancias particulares y no de la presencia de organizaciones de base o instituciones comunitarias, mucho menos de militantes políticos que canalizaran la iniciativa.

Dos hechos ocurridos en Quilmes y en Moreno sirven de ejemplo. El 30 de mayo, unas dos mil personas se congregaron frente al supermercado Llaneza de Wilde, el más grande de la zona, a pocas cuadras de las villas Azul e Itatí. Aunque la policía y la guardia de infantería parecían controlar la situación, el dueño del supermercado, para evitar males mayores, resolvió distribuir de manera gratuita unos trescientos litros de leche y otros tantos kilogramos de pan, azúcar, fideos y otros alimentos, que fueron cargados en un camión de gran porte. Es muy significativo que quienes negociaron la entrega hubieran insistido en que fueran los empleados del supermercado o la policía los que hicieran el reparto de la mercadería. Como ambos se negaron, la tarea quedó en manos de los

propios manifestantes. Según habían temido, mientras intentaban fraccionar los alimentos, grupos de vándalos tomaron el camión por la fuerza, se apropiaron de la mayoría de los bienes y destruyeron el resto. La gente presenció desesperada cómo grandes cantidades de leche se derramaban del camión sin que nadie hiciera nada para detener semejante sinsentido. Según un reporte, no sólo la desorganización, sino también la puja entre grupos de ambas villas habrían avivado la violencia durante el reparto.³⁷ La magnitud de la movilización y las características de los asentamientos nos harían esperar algún tipo de estructura de coordinación o liderazgo que impidiera este tipo de desbordes, pero nada de ello ocurrió. Por el contrario, la acción terminó siendo dominada por patotas violentas insensibles a las necesidades del conjunto. La policía, por su parte, aprovechó los disturbios para reprimir sin miramiento a los manifestantes. La escena que siguió fue descrita como "mujeres, viejos, nenes perseguidos por itakazos y gases lacrimógenos". La actitud de las fuerzas de seguridad podía anticiparse por el tenor de los comentarios que algunos agentes les hicieron a los periodistas presentes en el sitio: "Esta noche se arma en Avellaneda, van a ir todos estos negros de mierda a saquear todo".³⁸

Algo similar ocurrió cuando en el centro comercial de Moreno se reunieron unas dos mil personas de varios barrios cercanos, a la espera de que por segundo día se abriera una olla popular organizada por el municipio: grupos vandálicos impidieron su realización al comenzar a saquear los negocios de la zona. En las proximidades, un camión del municipio, con la asistencia de la policía y los bomberos, procuró distribuir alimentos, pero también debió huir apresuradamente al verse sobrepasado por la avalancha de gente. Poco después, según el reporte, una pandilla de jóvenes ingresó por la fuerza en un comercio mayorista de alimentos cercano, y detrás de esta, mujeres, hombres y niños sin que la policía pudiera hacer algo al respecto.³⁹ En suma, si bien en ocasiones se alcanzó una mejor coordinación, los saqueos colectivos no requirieron, ni parecieron tener, organizaciones sociales que les dieran forma. Bastaba con la decisión de la gente, el efecto de demostración generado por acciones similares a lo largo del país y un aparato represivo desbordado, desorientado o pasivo ante una situación política caótica y el inédito escenario de millares de familias reclamando comida para poder subsistir.

Uno de los más visibles síntomas de la escasa articulación de la revuelta es la rapidez con que se esparcieron rumores, entre quienes habían participado de los saqueos, de que otros como ellos vendrían de asentamientos vecinos a atacarlos. Pocas dudas caben de que se trató de un recurso de los servicios de inteligencia vinculados a las fuerzas de seguridad a fin

de que la gente no saliera de sus casas e inmediaciones. La táctica dio resultado. El pánico se apropió de los barrios humildes del Gran Buenos Aires y Rosario, y por unos días sus habitantes creyeron que la lucha contra los comerciantes se convertiría en una batalla de pobres contra pobres. Por la noche, se construyeron barricadas y se reunieron armas de fuego, piedras y palos para defender de gente tan necesitada como ellos las mercaderías obtenidas y sus escasas propiedades. Sus supuestos agresores estaban en ese momento haciendo lo propio. En el Conurbano bonaerense unas ciento cincuenta mil personas estuvieron por dos días en pie de guerra esperando los ataques. Aunque desde luego nunca se materializaron, los falsos rumores sirvieron para inmovilizar a la población en sus lugares de residencia y permitieron reforzar las medidas de seguridad.⁴⁰ Marcaron, de hecho, el fin de la ola de saqueos.

Un contraejemplo a lo dicho lo ofrecen las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires donde, a diferencia de otros conglomerados urbanos, se registraron muy escasos hechos de violencia colectiva. No puede decirse que los niveles de pobreza y vulnerabilidad fueran aquí menores que en el Gran Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Sin embargo, para sorpresa de las autoridades y la policía, las casi treinta villas de la capital se mantuvieron en relativa calma. Si aceptamos las explicaciones dadas por los propios habitantes, existen al menos tres razones principales. La primera tenía que ver con las motivaciones económicas: el desempleo, aunque no la pauperización, era algo menor que en otros asentamientos pobres del Conurbano, en especial con relación al trabajo femenino. La segunda remite a la estructura de oportunidades. Como la distancia entre las villas generaba una menor concentración espacial de la pobreza que en los cordones industriales, donde las fronteras entre barrios obreros, asentamientos y villas era cada vez más lábil, el control policial era más eficaz. La tercera, y más importante desde nuestro punto de vista, era la existencia de aceitadas asociaciones de carácter social o religioso que lograron poner en funcionamiento con cierta celeridad ollas populares y otros mecanismos de provisión de alimentos. Las instituciones mencionadas fueron el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la Capital, la Comisión de Madres Intervillas y la Pastoral Villera.⁴¹ Hay que recordar que las villas miserias que existían por entonces eran asentamientos de muy antigua data, conformados al calor del proceso de industrialización desde la década de 1930. La existencia de sólidas organizaciones de base territorial, que se generalizarían en los grandes cordones industriales en los años por venir, no resulta, pues, sorprendente. Para sus miembros, el saqueo no era una respuesta adecuada a las angustiantes circunstancias

del momento. Un cura de la Pastoral Villera explicó que habían tratado de persuadir a la gente de que los ataques a comercios eran una reacción individual e inmediatista. Otro activista de Ciudad Oculta, preciándose de su capacidad de organización, reflexionó:

Reaccionamos más rápido que cualquier gobierno y la gente lo reconoce. Acá todos nos conocemos y sabemos resolver nuestros problemas. Prueba de ello es que en estos momentos más difíciles nos pudimos unir los distintos sectores del barrio y hasta elaboramos un acta de compromiso con más de seiscientas firmas para trabajar juntos en el problema. Vaya usted a cualquier asamblea de un consorcio a ver si encuentra lo mismo.⁴²

"Marginados pero no marginales", dijeron, "hambre tenemos, pero no somos suicidas".⁴³

Uno de los rasgos más notorios de la ola de saqueos, como ya apuntamos, fue la activa participación de delincuentes comunes o pandillas juveniles. Era la primera vez que una protesta social masiva aparecía en vinculación tan estrecha con la violencia delictiva. En el pasado, cuando habían sido canalizadas por partidos, sindicatos o movimientos sociales, las acciones colectivas —desde huelgas y manifestaciones callejeras hasta tomas de fábricas y tierras o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad— mostraron un considerable grado de orden y disciplinamiento interno. Aunque la evidencia es fragmentaria, resulta claro que en este caso fueron grupos violentos de distinto tipo los que en muchas instancias ofrecieron la logística mínima para poner en marcha el asalto a los comercios, en especial cuando la acción involucraba enfrentamientos armados con la policía o los propietarios. Por cierto, el número de ladrones y personas con distintos antecedentes penales fue prominente entre los arrestados, y es pertinente suponer que los más activos en los enfrentamientos fueron los más proclives a caer en manos de la policía. Escasa o nula, en cambio, fue la presencia de militantes de izquierda o barriales. Dado que el gobierno y las fuerzas de seguridad, con las imágenes todavía frescas del asalto al cuartel de La Tablada en enero de ese año, buscaron con el mayor ahínco "extremistas" y "activistas de izquierda", su ausencia es muy sugestiva. El 1 de junio *La Nación* puso en su tapa la impactante noticia de que "veintitrés activistas que estarían vinculados con la subversión" habían sido arrestados en San Miguel, pero dos días después el juez reconoció que, en verdad, se desconocía su afiliación. Había, en cambio, dos militantes del Movimiento al Socialismo (el prin-